

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango por Juan Valdéz, contra la ejecutoria de la 2ª Sala del Tribunal de Justicia del Estado, que lo condenó á sufrir la pena de muerte, por el homicidio que perpetró en la persona de Alejandro Gomez.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Gefe de Hacienda encargado de llevar la voz fiscal, dice: que todo lo expuesto por el reo Juan Valdéz, no prueba que se haya violado en su persona la garantía que otorga el artículo 22 de la Constitución federal, pues solo se contrae á probar lo inmerecido de la pena que le impuso el Tribunal Superior del Estado. Que aunque tal aseveracion fuera cierta, á los Tribunales federales no corresponde revisar y mucho menos reformar ó revocar los autos ó sentencias de los Jueces del Estado, sino únicamente hacer efectivas las garantías constitucionales.

Por lo expuesto, y en cumplimiento de sus deberes, el que suscribe reproduce en todas sus partes su pedimento fiscal de 18 de Agosto anterior, repitiendo que á su juicio no debe ampararse al reo Juan Valdéz, contra la sentencia de muerte que pronunció en su contra el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el delito de homicidio con alevosía. Durango, Setiembre 17 de 1873.—*Juan Nájera*.—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Durango, Setiembre 24 de 1873.—*Juan Nájera*.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Durango, Setiembre 24 de 1873.—Visto el presente juicio de amparo promovido por el reo Juan Valdéz, contra la ejecutoria del Supremo Tribunal de Justicia del

Estado que lo condenó á muerte por el homicidio que perpetró en la persona de Alejandro Gomez. Teniendo en cuenta la suspension del acto reclamado; lo pedido por el Ministerio fiscal, y cuanto mas ver convinco.

Considerando: que del informe de la autoridad ejecutora, aparece plenamente probado que el quejoso Juan Valdéz fué considerado en las tres instancias respectivas, como un verdadero homicida alevoso: que bajo ese carácter le fué aplicada la pena que demarca la ley 2ª lib. 12 tit. 21 de la Novísima, y el artículo 29 de la ley de 5 de Enero de 1857 que no es otra que la de muerte.

Que esa misma pena está permitido aplicar por el artículo 23 de la Constitución al homicida, cuando en la perpetracion de su delito ocurran las circunstancias de alevosía y ventaja.

Que el derecho presume no ser posible que tres distintos jueces se hayan equivocado al considerar el delito de Valdéz con las circunstancias arriba referidas.

Que en consecuencia, al aplicar á Valdéz las autoridades judiciales del Estado, la pena de muerte, han obrado en la órbita de sus facultades, y en consonancia con lo que previene el artículo 23 de la Constitución ya citada.

Por tales fundamentos, el C. Juez de Distrito del Estado Lic. Gerónimo Sida, dijo: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al reo Juan Valdéz contra la ejecutoria de la 2ª Sala del Tribunal de Justicia del Estado, que lo condenó á sufrir la pena de muerte por el homicidio que perpetró en la persona de Alejandro Gomez. Remítanse estas actuaciones á la Suprema Corte de Justicia, y sáquense las copias correspondientes para la redaccion del Semanario Judicial. Y por este auto definitivamente juzgando así lo proveyó y firmó el expresado C. Juez por ante mí. Doy fé—*Gerónimo Sida*.—Una rúbrica.—*Juan B. Arellano*, secretario.—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Durango, Setiembre 24 de 1873.—*Juan B. Arellano.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 24 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango por Juan Valdéz, contra la sentencia ejecutoria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que lo condenó á la pena de muerte como reo de homicidio perpetrado con alevosía y ventaja, con cuya resolución se han violado en concepto del quejoso, las garantías constitucionales que protejen la vida del hombre, pues segun afirma, el delito no fué cometido con las circunstancias agravantes que motivaron la imposición de la pena capital, y considerando: que el artículo 103 de la Constitución federal permite, aplicar la pena de muerte al homicida con alevosía ó ventaja: que en las tres instancias que ha tenido la causa de Valdéz, se le condenó uniformemente como reo de homicidio con esas dos circunstancias agravantes: que por tales consideraciones, aparece: que no ha habido violación de las garantías constitucionales que invoca el quejoso, se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Durango en 24 de Setiembre de este año, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al reo Juan Valdéz, contra la ejecutoria de la 2ª Sala del Tribunal de Justicia del Estado, que lo condenó á sufrir la pena de muerte, por el homicidio que perpetró en la persona de Alejandro Gomez.

Devuélvase las acutaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexica-

nos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Enero 9 de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz*, oficial mayor interino.

Es copia que certifico. México, Noviembre 14 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, secretario.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guaymas por Francisco Perez, contra la providencia dictada por el Gefe político de Salamanca, declarando no haber lugar á ponerlo en libertad, conforme al decreto de amnistía de 27 de Julio del año pasado, por no estar comprendido en esta ley.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que Francisco Perez preso en la Penitenciaría de Salamanca, promulgada la ley de amnistía de 27 de Julio del presente, ocurrió al C. Gefe político de ese Partido solicitando su libertad, por estar comprendido en el artículo 2 de esta ley. El Gefe político no accedió á esta solicitud, por que el delito cuya pena estaba extinguiendo, no era político sino el de plagio, segun parecia del decreto número 29 del 4º Congreso del Estado de fecha 11 de Diciembre de 1871. Esta determinación viola en concepto del quejoso, las garantías individuales consignadas en los artículos 18 y 13 de la Constitución, y fundado en ellos y en la fracción 1ª del artí-